



JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 2
C/ Aurea Díaz Flores, nº 5 Edificio Barlovento
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 29 42 09/20 90 95
Fax.: 922 20 02 04
Email.: conten2.sctf@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0000495/2015
NIG: 3803845320150002135
Materia: Administración tributaria
Resolución: Sentencia 000249/2016
IUP: TC2015013538

Intervención:
Demandante

Interviniente:

Abogado:
Alejandro Quintana Martín

Procurador:

Demandado

Consortio de Tributos de
Tenerife

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de 2016

Vistos han sido los presentes autos de procedimiento ordinario por el Ilmo. Sr. Magistrado – Juez Titular de este Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de Santa Cruz de Tenerife y su provincia.

El recurso ha sido promovido por la compañía [REDACTED] representada y defendida por el abogado don Alejandro Quintana Martín, contra el Consorcio Insular de Tributos de Tenerife, representado por la procuradora doña [REDACTED] y defendido por el servicio de defensa jurídica y cooperación jurídica municipal del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

La cuantía del recurso es de 43.373'17 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 26 de noviembre de 2015 la compañía [REDACTED], representada y defendida por el abogado don Alejandro Quintana Martín, interpone recurso contencioso administrativo contra el Consorcio Insular de Tributos de Tenerife.

Segundo.- El día 11 de diciembre de 2015 se tiene por interpuesto el recurso en tiempo y forma.



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

[REDACTED] - Magistrado-Juez

29/12/2016 - 13:37:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



Tercero.- El día 4 de febrero de 2016 se presenta la demanda. En ella se solicita del juzgado que:

“declare:

1º.- La falta de notificación adecuada de las providencias de apremio y diligencias de embargo que sirven de base al embargo practicado por ser practicada en un lugar inidóneo para su realización, siendo improcedente el recurso a la publicación de anuncios en el Boletín Oficial habiendo provocado indefensión en mi representada, condenando a la administración a la devolución de la cantidad embargada más los intereses legales.

2º.- Asimismo, que se declaren contrarias a Derecho las notificaciones de las liquidaciones contenidas en el expediente que incurran en cualquiera o varios de los siguientes defectos: no expresar los conceptos que se notifican; o bien expresando el concepto (p.e. Liquidación IBI) no exprese el período concreto o ejercicio al que se refiere; no designe la identidad de quien recibe las notificaciones o la relación que tenga con el interesado; no conste la causa por la cual no se pudo notificar, o bien no consten las fechas y horas de realización de los intentos de notificación.

3º.- Declare prescrita la acción de la Administración para exigir el pago del Impuesto de Actividades Económicas del año 2007 y todos los impuestos sobre bienes inmuebles del año 2007 y 2008, así como la tasa por recogida de basura del año 2011, por haberse notificado la liquidación mediante la entrega del expediente el 28 de julio de 2015.”

Cuarto.- El día 12 de abril de 2016 la parte actora interesa la ampliación del recurso.

Quinto.- Por auto de 6 de junio de 2016 se accede a la ampliación del recurso.

Sexto.- El día 8 de noviembre de 2016 se presenta la contestación a la demanda. En ella se interesa del juzgado la desestimación de la demanda.

Séptimo.- El día 14 de noviembre de 2016 se acuerda que no ha lugar a recibimiento del pleito a prueba. En la misma fecha se acuerda el trámite de conclusiones.

Octavo.- El día 29 de noviembre de 2016 se presenta el pliego de conclusiones de la recurrente.

Noveno.- El día 22 de diciembre de 2016 se presenta el pliego de conclusiones de la administración recurrida.

Décimo.- El día 26 de diciembre de 2016 se declara el pleito concluso para sentencia.



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

██ - Magistrado-Juez

29/12/2016 - 13:37:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- A diferencia del proceso civil, en el proceso contencioso administrativo las pretensiones que pueden ser ejercidas por quien interpone el recurso se encuentran tasadas en la ley, tal y como se aprecia de la lectura del artículo 31 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA). Por consiguiente, de entre todos los pronunciamientos que nos solicita la actora en demanda y en escrito de solicitud de ampliación de recurso contencioso administrativo sólo debemos pronunciarnos sobre la conformidad o disconformidad a Derecho de la actuación administrativa impugnada, sin que exista pretensión mero declarativa en el proceso contencioso administrativo y sin que puedan confundirse alegaciones con pretensiones.

Segundo.- En el folio 18 del expediente administrativo podemos observar una notificación de impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) con fecha de emisión 21 de enero de 2009 y fecha de envío 5 de febrero de 2009 y si bien es cierto que en el folio 19 consta un sello de [REDACTED] SL, no lo es menos que no consta el contenido de la liquidación que se notifica, contenido expresamente descrito y exigido en los artículos 101.1 y 102.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). Estos mismos defectos se aprecian en las que constan en los folios 20 a 105 del expediente administrativo, ambos incluidos, de manera que con independencia del domicilio al que hubieran sido remitidas, en ningún caso son válidas, por infracción de los artículos 101.1 y 102.2 de la LGT en relación con el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ – PAC), puesto que la infracción de los primeros impide considerar que se haya notificado al menos el texto íntegro del acto, como exige el último de los preceptos citados.

Por lo tanto, son inválidas todas las notificaciones que constan en los folios 18 a 105 del expediente administrativo, ambos inclusive. Y siendo inválidas las notificaciones de las liquidaciones, esto impide el dictado de providencias de apremio, porque el presupuesto de hecho de la vía de apremio es el impago en período de pago voluntario y no puede pagar quien desconoce el contenido exacto y completo de aquello que se le reclama.

Tercero.- En el folio 139 sí aparece una liquidación tributaria donde se expresa la identidad del contribuyente y los cálculos que conducen a la determinación a la cuota. También, en folios 144,148 y concordantes. Ahora bien, en todas ellas no se encuentra la firma de la autoridad que las dicta, sino la inserción de una imagen de dicha firma tomada mediante procedimiento de escaneo, tal y como se reconoce en la propia contestación a la demanda, fundamento jurídico material I.3º.



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

[REDACTED] - Magistrado-Juez

29/12/2016 - 13:37:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



Como afirma la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2007:

" la firma es el trazado gráfico, conteniendo el nombre, los apellidos y la rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los documentos para darles autoría y virtualidad y obligarles con lo que en ello se dice. Aunque la firma puede quedar reducida, sólo a la rúbrica o consistir, exclusivamente, incluso, en otro trazado gráfico, o en las iniciales, o en grafismos ilegibles, lo que la distingue es su habitualidad, como elemento vinculante de esa grafía o signo de su autor. Y en general su autografía o grafía, como vehículo que une a la persona firmante con lo consignado en el documento, debe ser manuscrita o de puño y letra del suscribiente, como muestra de su inmediatez y de la voluntariedad de la acción y del otorgamiento. Pero la firma autógrafa no es la única manera de signar pues hay otros mecanismos que, sin ser firma autógrafa, constituyen trazados gráficos, que asimismo conceden autoría y obligan. Así, las claves, los códigos, o los signos y, en casos, los sellos con firma en el sentido indicado". Como puede observarse, el Tribunal Supremo insiste en que lo propio de la firma es evidenciar la autoría del documento y cuando se refiere a las distintas formas de expresión en ningún caso se refiere al escaneo y además es lógico que así sea porque escanear una firma no es lo mismo que firmar, de la misma manera que no es lo mismo hacer una fotografía que escanear una fotografía que ya ha sido tomada con anterioridad, en ambos casos, y en cuantos se pudieran poner de ejemplo, la diferencia es sustancial.

El diccionario de la Real Academia Española, por su parte, y citando por la edición del tricentenario, define la firma en los siguientes términos:

- "1. f. Nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en undocumento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar laaprobación de su contenido.
2. f. Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos paraaprobar o dar autenticidad a un documento.
3. f. Conjunto de documentos que se presenta a quien corresponda paraque los firme.
4. f. Acción de firmar.
5. f. Razón social o empresa.
6. f. sello (ll carácter peculiar o especial).
7. f. Autor o persona importante en el campo periodístico o artístico, especialmente literario."

Como puede observarse, en ningún momento participa del concepto de firma la imagen que se obtiene de una firma por medio de programas informáticos y/o aparatos electrónicos.





La importancia de la firma se aprecia a lo largo del articulado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (LRJ – PAC) aplicable al caso por razones temporales. Así, el art. 55.2 LRJ-PAC , cuando se refiere al supuesto en que el acto administrativo es producido de forma verbal, ordena precisamente que quede constancia escrita del mismo, la cual "se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente". Es decir, no se limita a ordenar que se haga constar por escrito el acto administrativo, sino que también ordena que sea firmado en todo caso.

A esto se añade que cuando el legislador ha querido permitir sistemas alternativos a la firma manual lo ha regulado expresamente. En concreto, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, regula este tipo de firma.

En ausencia de regulación expresa que lo permita, no puede la administración pública utilizar el cómodo sistema de escanear la firma de una autoridad o funcionario público y posteriormente insertarla mediante procedimientos informáticos en una cantidad indeterminada de resoluciones, sin que pueda comprobarse qué persona está llevando a cabo esa inserción. A diferencia de los ciudadanos, que pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, las administraciones públicas sólo pueden actuar con arreglo a la ley y al Derecho y esto significa, en virtud del que ha sido denominado principio de habilitación de potestad, que sólo pueden ejercer las potestades expresamente atribuidas por el ordenamiento jurídico. La situación de acumulación de tareas a que alude la administración en su contestación a la demanda podrá ser un argumento de facto, pero no lo es de iure y en todo caso puede afrontarse la misma situación por medio de procedimientos de firma electrónica, que sí están expresamente regulados por la ley, según hemos citado anteriormente.

En el mismo sentido, es decir, de considerar inválida la utilización de imágenes escaneadas como sustitutivas de la firma del acto administrativo, podemos citar las sentencias del juzgado de lo contencioso administrativo de Lérida de 20 de febrero de 2014, de 5 de julio de 2013, 21 de septiembre de 2012, 30 de septiembre de 2011 y 14 de marzo de 2011.

También, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, nº 559/1997, de 30 de julio de 1997, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (sección 2ª) (recurso 787/1995), en la cual se dice:

"SEGUNDO.- De todos los motivos alegados, y dada su relevancia, comenzamos por el último, pues de prosperar haría innecesaria consideración alguna sobre el resto de los motivos.

Conviene hacer algunas precisiones sobre el concepto de los documentos públicos y oficiales; y en este sentido y a diferencia de los documentos públicos, que se definen y enumeran, respectivamente, en los arts. 1216 CC y 596 LECiv , no existe en la legislación española una definición de lo que debe entenderse por documento oficial, habiéndose llenado tal vacío, tanto por la doctrina científica como por la jurisprudencia; aquélla conceptuando documentos



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

██████████ - Magistrado-Juez

29/12/2016 - 13:37:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



oficiales los provenientes de las entidades públicas en el desempeño de sus funciones o fines, los expedidos por el Gobierno, por sus agentes, por los empleados públicos que tienen el poder de hacerlo, por las oficinas de todas clases que, con arreglo a la institución los expidan o los que acreditan una situación jurídica, función o garantía mediante la intervención de algún organismo público del Estado, Provincia o Municipio; y la jurisprudencia ha añadido aquellos que para satisfacer necesidades o conveniencias del servicio público, se expiden o firman por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, y aquellos otros que "per se" son privados, pero están destinados ulteriormente, a incorporarse a un expediente público (STS 30 septiembre 1981 [RJ 1981/3412]).

En este orden de cosas, el Código Civil sólo nos da un concepto de documento público en el art. 1216 "son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley", precepto que hay que poner en relación con el enumerativo art. 596 LECiv . El criterio básico de distinción es el del autor que sea funcionario público, al que se reconducen los otros dos; porque el funcionario público sólo actúa como tal, sólo "es" funcionario público, cuando actúa dentro de los límites de su competencia y de acuerdo con las normas que rigen su función. Por otro lado, el documento ha de estar "autorizado" por el funcionario público; éste ha de ser el "autor" del documento; del documento mismo y además ha de tener competencia para autorizar documentos públicos, a cuyo efecto el art. 596.3.º LECiv considera documentos públicos "los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados para ello", es decir para expedir documentos públicos. Además de esta competencia funcional genérica, el funcionario autorizante ha de tener la competencia funcional específica para la clase de documento de que se trate.


De todo lo expuesto no cabe más que afirmar que las resoluciones administrativas, que participan de la condición de documentos públicos han de ser debidamente firmadas, apareciendo la firma de las mismas como presupuesto vinculado tanto a su propia existencia como a su invariabilidad. La firma es imprescindible requisito para que como documento oficial esté legalmente autorizado y su ausencia provoca la inexistencia del mismo en el orden jurídico ante la inexistencia de autor del mismo con los requisitos antes expuestos.

Por todo lo expuesto, y acogiendo la doctrina expuesta, se llega a la conclusión de la inexistencia de la resolución sancionadora, lo que implica la estimación del recurso, sin más consideración". Por tanto, esta claro que la firma (evidentemente la autógrafa) es un elemento esencial hasta el punto, de que la sentencia transcrita así lo asevera.

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura nº 1321/2000, de 22 de septiembre de 2000 (dictada en el recurso 1944/1997); y del mismo tribunal y ponente; la nº 1323/2000, de 25 de septiembre de 2000, (dictada en el recurso 1945/1997), (la argumentación es la misma en las 2 sentencias):

"TERCERO.- Es evidente que para que una resolución administrativa exista y carezca de vicios necesita que se adopte y así conste formalmente con la firma de la autoridad competente. En caso de delegación de competencias es preciso que se cumplan los requisitos legales establecidos.



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:	
 - Magistrado-Juez	29/12/2016 - 13:37:36
Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.	



El Estado de Derecho es aquel en que el respeto de los derechos fundamentales queda, constatado formalmente ya que la forma es un requisito que acredita la regularidad del procedimiento y el cumplimiento de la legalidad. Las autoridades a la hora de dictar una resolución han de respetar una serie de derechos y seguir unos trámites exigidos para la garantía de los derechos particulares y generales. La mayor vulneración de los derechos es la ausencia de una resolución dictada por la autoridad competente y en la que el Estado se viene a pronunciar sobre una situación jurídica singularizada.

A la vía contencioso administrativa debe remitir la Administración los documentos originales o copia autenticada de los mismos. Lo contrario da lugar a una gran inseguridad jurídica y a que los derechos se conviertan en papel mojado. De qué sirven los derechos si a la postre no se sabe quién ni porqué ni cómo se ha tomado la resolución que afecta a los intereses. La potestad sancionadora era entonces indelegable (*art. 127.2 de la Ley 30/92*), hasta la reforma operada por la Ley 2/99, e incluso la delegación de firma (*art. 16.4 Ley 30/92*), pues bien para qué sirven tales derechos o como va a controlar la Sala el cumplimiento de la Ley en este punto si la resolución no aparece firmada por nadie, ni sabemos quién ha tomado la decisión. La firma del titular del órgano de la competencia es esencial para la existencia del acto. Sin firma la resolución no existe y lo que no existe no puede ser sanado ni convalidado. La resolución no se encuentra firmada sino cuando el titular del órgano extiende su firma entera, media o rúbrica que implica la asunción por su responsabilidad del contenido del acto. No está firmada cuando aparece estampillado simplemente el órgano llamado a asumir la responsabilidad, pero sin intervención directa de la persona titular del mismo."

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sec. 3ª), de fecha 31 de marzo de 2004 (en el recurso 8252/2000):

"SEGUNDO.- El demandante alegó la "(...) nulidad de la notificación por falta de firma -Se formula por violación de lo establecido en el art. 53.1 de la Ley 30/92 (RCL 1992 , 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (...) se está sustrayendo a mi mandante la posibilidad de impugnar una resolución en base a incompetencia del órgano, lo cual implica una indefensión; es evidente que desconociéndose la competencia se desconoce el procedimiento que debe seguirse (...) por lo que se está sustrayendo a mi mandante la posibilidad de utilizar los recursos que cada procedimiento tiene establecido (...) nulidad "IPSO IURE" (...) art. 47.1 C) de la LPA (RCL 1958, 1258, 1469, 1504; RCL 1959, 585) (...)" -fundamento de derecho III, apartado 1, de la demanda-

Ciertamente, "Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos" - artículo 53, apartados 1 y 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero), en adelante, LRJ-PAC-. "En las resoluciones administrativas y comunicaciones oficiales, internas o externas, elaboradas por los Servicios centrales o



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

[Redacted] - Magistrado-Juez

29/12/2016 - 13:37:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



periféricos de la Administración, serán obligatorias: a) La identificación funcional del órgano o jefatura de procedencia que se realizará expresando en la antefirma el cargo o puesto al que corresponda emitir o cursar la comunicación, consignando, además, necesariamente, el desempeño por el firmante en los casos de delegación o en los supuestos normales de sustitución, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de enero de 1981, por la que se establecen determinados requisitos formales de las resoluciones administrativas ("Boletín Oficial del Estado" del 14). b) La identificación nominativa del firmante que se realizará consignando el nombre y apellidos al pie de la firma y rúbrica correspondientes" - artículo 1.1 de la Orden de 7 de julio de 1986, por la que se regula la Confección de Material Impreso y se establece la Obligatoriedad de Consignar determinados Datos en las comunicaciones y escritos administrativos-. El artículo 3.1 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, que deroga el anterior y en vigor desde el 26 de septiembre de 1999, dispone que "Todo documento que contenga actos administrativos, incluidos los de mero trámite, debe estar formalizado. Se entiende por formalización la acreditación de la autenticidad de la voluntad del órgano emisor, manifestada mediante firma manuscrita o por símbolos o códigos que garanticen dicha autenticidad mediante la utilización de técnicas o medios electrónicos, informáticos o telemáticos de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado".

Los actos administrativos se encuentran firmados cuando el titular del órgano extiende su firma entera, media o rúbrica; actuación que implica la asunción por su responsabilidad del contenido del acto. Los actos administrativos no están firmados cuando aparece estampillado simplemente el órgano llamado a asumir la responsabilidad, pero sin intervención directa de la persona titular del mismo. La Ley señala a una persona o autoridad competente para resolver sobre una cuestión, y no a otra. (...)

Y la Sala no puede pasar por alto un vicio tan esencial que determina, no la nulidad propiamente dicha, sino la inexistencia de los actos a que afecta. El Estado de Derecho es aquel en que el respeto de los derechos fundamentales queda constatado formalmente, ya que la forma es un requisito que acredita la regularidad del procedimiento y el cumplimiento de la legalidad, como garantía de los particulares y de interés y orden público. La firma del titular del órgano de la competencia es esencial para la existencia del acto. En este caso, sin firma, los actos -de liquidación tributaria, realizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria - no existen; y lo que no existe no puede ser sanado ni convalidado.

Tal forma de proceder determina la declaración que se hace por la presente de inexistencia de los hipotéticos actos administrativos de liquidación tributaria y de nulidad de todos los demás y de las resoluciones aprobatorias de los mismos".



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

██████████ - Magistrado-Juez

29/12/2016 - 13:37:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha núm. 124/2009 de 16 marzo de 2009(Sección 1ª); dictada en el recurso 816/2005:

"El Documento nº 2 del expediente es la clave para la resolución del procedimiento que nos ocupa. Se trata de un escrito realizado en nombre del Jefe del Servicio de Gestión de Ayudas en fecha 4 de junio de 2004 en el que la Administración manifiesta que existen que existen incidencias con los animales declarados. El primer problema que plantea este escrito, no alegado por ninguna de las partes, pero que resulta una cuestión de orden público, es que la firma del Jefe del Servicio de Gestión de Ayudas es una firma escaneada, esto es, colocada debajo del nombre del titular del órgano administrativo mediante el sistema de "copiar y pegar". No es una firma manuscrita ni existe un sello oficial de la Jefatura del Servicio que pudiera garantizar la autenticidad de la misma. En otras palabras, que dicho escrito de 4 de junio de 2004 ha podido ser realizado por cualquiera.

Cualquier acto administrativo debe ser firmado por la autoridad o en su caso funcionario autor del mismo. Incluso en los casos de ejercicio de las potestades administrativas de modo verbal exige la Lev como mínimo la firma del titular o funcionario (art. 55 de la Lev 30/1992), de igual manera que deben ser firmados por parte del administrado cualesquiera escritos que dirija a la Administración (art. 70.1.d) de la misma Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . Lo que está claro es que el documento nº 2 del expediente no está firmado ni manuscritamente ni con los "códigos" que hubiera podido dejar un procedimiento de firma electrónica de los previstos en la Lev 59/2003, de 19 diciembre RCL 2003\2975. En definitiva, no estamos ante un documento auténtico".

Por todo lo cual, y haciendo nuestra esta doctrina, entendemos igualmente que son inválidas todas las resoluciones carentes de firma, pues ya hemos establecido, y nos permitimos insistir en ello, que la imagen escaneada de una firma no es una firma, ni un tipo de firma, es un archivo de imagen.

Cuarto.- Por todo lo expuesto anteriormente, procede la estimación parcial del recurso, pues si bien se estima la disconformidad a Derecho y se anulan las resoluciones administrativas impugnadas, en ningún caso se pueden estimar las solicitudes de pronunciamientos mero declarativos también interesadas en demanda y ampliación. Así que cada parte deberá pagar las costas causadas a su sola instancia y la mitad de las que sean comunes, por aplicación del artículo 139 de la LJCA.

Por consiguiente,

de conformidad con cuanto se ha expuesto

y en el nombre de Su Majestad el Rey,



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

██████████ - Magistrado-Juez

29/12/2016 - 13:37:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.



FALLO

1º) Estimar parcialmente el recurso.

2º) Declarar la disconformidad a Derecho de las resoluciones administrativas recurridas y anularlas.

3º) Declarar el derecho de la recurrente a obtener la devolución de las cantidades embargadas, con los intereses correspondientes.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación.

Así por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma Su Señoría Ilustrísima, don [REDACTED] Magistrado – Juez Titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de Santa Cruz de Tenerife y su provincia.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado – Juez que la firma, en el mismo día de su fecha y constituido en audiencia pública. Doy fe.-



Este documento es copia auténtica del firmado electrónicamente por:

[REDACTED] - Magistrado-Juez

29/12/2016 - 13:37:36

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia Protección de Datos de Carácter Personal, le hago saber que los datos contenidos en esta comunicación son confidenciales, quedando prohibida su difusión por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.

